

IV. DEMOCRACIA Y GIRO SOCIAL: LOS RETOS DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

*Laura Ruiz Jiménez**

Las convocatorias electorales de los últimos años en América Latina confirman la creciente preferencia de los electorados por partidos situados a la izquierda del espectro político. A principios de los años noventa, sólo Chile tenía en el gobierno a una coalición en la que el Partido Socialista era pieza esencial. Sin embargo, desde el final de la década, candidatos de la izquierda como Hugo Chávez en Venezuela, Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil, Lucio Gutiérrez en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina o Tabaré Vázquez en Uruguay han ganado la presidencia del estado. Al triunfo de estos candidatos en elecciones presidenciales hay que sumar el avance de la izquierda en los comicios legislativos, regionales y municipales de otros países. La amplia victoria de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en las elecciones regionales del año 2003 en Perú, o el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las principales ciudades nicaragüenses frente a una oposición dividida, permiten pensar en la conformación de nuevos gobiernos progresistas en los próximos años.

El avance de estos partidos y coaliciones es consecuencia directa del fracaso del modelo neoliberal que se aplicó en la región durante los años noventa y de su alto coste social. Los electores han optado por respaldar a las formaciones partidarias que se mostraron críticas con ese paradigma porque consideraban que no garantizaba el crecimiento, debilitaba enormemente al sector productivo nacional y generaba desempleo y pobreza. Las apreciables tasas de inversión y el ritmo de crecimiento se mantuvie-

* Laura Ruiz Jiménez es directora del Master de Cooperación Internacional en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

ron sólo hasta 1997 y cayeron abruptamente después, confirmando el veredicto negativo de la izquierda sobre la sostenibilidad del modelo. Estos gobiernos comparten el rechazo por el Consenso de Washington y reclaman su sustitución por una estrategia de desarrollo realmente eficaz e inclusiva. Sin embargo, todos ellos son conscientes de la imposibilidad de aplicar un modelo de desarrollo diferente del impuesto por los organismos financieros internacionales y las grandes corporaciones. Su margen de acción no es amplio, pero están realizando interesantes esfuerzos para flexibilizar el modelo económico y romper la desigualdad y los privilegios que están tan firmemente asentados en sus países.

En la mayoría de los casos, es la primera vez que ganan la presidencia y estos movimientos conforman un grupo muy heterogéneo, tanto por su origen y trayectoria política como por su estilo de gobierno y gestión. Pero, por encima de las diferencias, están aplicando políticas que demuestran un compromiso común con un proyecto reformista. En el estrecho margen de acción que deja el modelo neoliberal, están apostando por devolver al estado atribuciones que le fueron arrebatadas, aplicar ambiciosas políticas sociales, aprobar normas y leyes que acaben con la desigualdad y articular una forma de relación menos sumisa con los organismos financieros internacionales y las grandes empresas extranjeras.

La izquierda frente al neoliberalismo

El profundo cambio electoral en América Latina está estrechamente vinculado al fracaso del modelo neoliberal y a los altos costes sociales que ha tenido. Hacia 1990, los organismos financieros internacionales auguraban para esta región una exitosa y sostenida trayectoria económica si aplicaba el recetario del Consenso de Washington. El Banco Mundial estimaba que, gracias a las políticas de privatización de empresas públicas, desregulación y apertura comercial, la región tendría altas tasas de crecimiento durante un largo periodo de tiempo, lo que le permitiría superar los problemas del subdesarrollo y disminuir drásticamente los indicadores de pobreza.

La realidad quedó, sin embargo, muy lejos de las expectativas. Las tasas de crecimiento fueron buenas en los primeros años de la década de los noventa, coincidiendo con la llegada de inversiones es-

tadounidenses y europeas interesadas en adquirir las empresas de propiedad estatal puestas en venta. Pero a partir de la crisis asiática de 1997, los indicadores económicos comenzaron a ser negativos. La tasa media de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en la región entre 1990 y el año 2000 fue de sólo el 1,7%, muy inferior a lo programado e insuficiente para relanzar el crecimiento. El modelo también implicaba un proceso de apertura a flujos de inversión externa que tampoco se comportaron de acuerdo a los pronósticos. La inversión extranjera directa alcanzó cifras muy altas mientras estaban en venta empresas que tenían amplios mercados asegurados, pero los flujos disminuyeron abruptamente tras la crisis asiática y no se han recuperado después. Ni las tasas de crecimiento fueron altas ni los flujos financieros sostenidos.

El aumento del comercio y la inversión antes de 1997 y la aplicación del nuevo modelo no se tradujeron en mejores condiciones de vida para la mayoría de los latinoamericanos. Pese a la amplitud de las reformas, la pobreza apenas disminuyó del 48% en 1990 al 43% en el año 2002. Con esta disminución de sólo cinco puntos, y dado el crecimiento natural de la población, el número de personas que vive bajo el umbral de la pobreza aumentó en 14 millones, hasta llegar a 214.¹ Pero además, las recetas neoliberales implicaron un recorte de los gastos estatales que afectó severamente a servicios esenciales para los ciudadanos de menores ingresos como la salud o la educación, y provocaron un claro aumento del desempleo, el trabajo precario y la economía informal.

El estancamiento de la economía, el caro e ineficiente servicio de muchas empresas privatizadas, la merma en la provisión de servicios básicos por parte del estado y las peores condiciones laborales alimentaron un malestar que ha ido en aumento y ha tenido un claro impacto electoral. En los comicios celebrados desde 1998, han consolidado su posición aquellos partidos que llevaban años cuestionando la validez de un modelo basado sólo en el mercado.

El compromiso por mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y empobrecidos es una característica común a estos gobiernos calificados de izquierdistas. Hablar de la izquierda latinoamericana

¹ Comisión Económica para América Latina, *Panorama social de América Latina 2001-2002*, CEPAL, Santiago de Chile, 2002.

americana requiere, sin embargo, reconocer la pluralidad de trayectorias y de estilos de gestión que engloba el término, y admitir la radical distancia ideológica que existe entre esta nueva izquierda y la izquierda latinoamericana de hace dos décadas. Buena parte de los partidos progresistas que han accedido al poder tienen una larga trayectoria política y, en este periodo de tiempo, han realizado un viraje constante hacia posiciones moderadas.

El Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio uruguayo y el Partido Justicialista de Argentina integraban en 1970 a grupos sumamente críticos con la democracia capitalista de sus países y tenían una retórica anti-sistema que ha sido abandonada. Hoy incorporan en sus filas a antiguos revolucionarios y militantes de grupos armados, pero su apuesta ideológica ya no cuestiona el modelo democrático capitalista sino sólo la desigualdad y la injusticia con la que ha funcionado en la región. Su tránsito hacia posiciones más moderadas está determinado por el deseo de captar el voto de grupos más amplios de ciudadanos, y estos han respondido favorablemente.

La apuesta por reformar el sistema desde dentro no es una simple declaración de intenciones, sino un compromiso que muchos de ellos llevan años desarrollando con éxito. En buena parte de los casos, han llegado al poder con una acreditada experiencia de gobierno. Sólo el Partido Justicialista de Néstor Kirchner tuvo en el pasado acceso a la presidencia, pero el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Frente Amplio uruguayo tienen una sólida trayectoria de gestión pública al frente de estados e importantes municipios. El PT, siempre derrotado en las presidenciales, cosechó desde principios de los ochenta éxitos electorales que le concedieron el gobierno de un número creciente de estados y ciudades. Entre ellos, Río Grande do Sul y su capital Porto Alegre se han convertido en paradigma de gobierno eficaz y transparente. También el Frente Amplio adquirió una sólida experiencia como gestor municipal al frente de urbes como Montevideo, ciudad que concentra el 40% de la población del país y que ha estado en manos del partido ahora gobernante desde 1990.

Este desempeño ha otorgado a los políticos progresistas una experiencia determinante antes de asumir la presidencia y ha permitido a los votantes comprobar su capacidad de gestión y la posibilidad real de introducir reformas que beneficien a los sectores siempre olvidados. La nueva izquierda se muestra sumamente pragmática y ha aceptado el di-

ficil reto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos dentro de los estrechos márgenes que impone el sistema económico.

¿Qué margen de acción tiene la izquierda latinoamericana?

El viraje político en muchos países de América Latina expresa el deseo de las mayorías de cambiar el paradigma económico neoliberal. Los ciudadanos reclaman una economía que sirva a todos y genere empleo, pero también demandan políticas sociales más activas y una mayor independencia frente a los organismos financieros y las grandes transnacionales, que tanto inciden en sus posibilidades de desarrollo. Los electores se están pronunciando en contra de los partidos responsables de la aplicación de las políticas neoliberales, no sólo por los malos resultados de éstas sino por el alto nivel de corrupción que acompañó a su puesta en marcha.

Lula Da silva, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, Hugo Chávez o Lucio Gutiérrez obtuvieron la victoria en comicios marcados por durísimas críticas al modelo neoliberal, en los que se comprometieron a controlar la corrupción y a fortalecer el papel del estado frente a las corporaciones. Apostaron por un estado que no se limitaría a ser garante de la legalidad, sino que recuperaría su papel redistribuidor y asumiría una posición más activa frente a los intereses foráneos.

Sin embargo, pese al cuestionamiento del neoliberalismo y las fuertes denuncias contra los organismos financieros y las compañías extranjeras, estos Ejecutivos son plenamente conscientes de que no pueden sustituir el modelo económico impuesto. Reconocen que el proceso de apertura económica es un hecho irreversible y que resultar confiable a los organismos internacionales y las grandes empresas es esencial para garantizar la llegada de inversiones y préstamos al país.² Saben que no pueden poner en marcha un modelo de crecimiento diferente al neoliberal, pero sí gestionar éste de manera más favorable para la mayoría. Su seña de identidad es precisamente la aplicación de medidas encaminadas a

² Muchos de ellos se preocuparon, ya en la campaña electoral, por dar a conocer prontamente el nombre del futuro ministro de Economía: un político siempre moderado, capaz de garantizar el continuismo y de tranquilizar a los agentes económicos.

modificar las reglas del juego y generar mejores condiciones de vida. Las políticas difieren de un país al otro, al igual que los resultados de su aplicación. Sin embargo, dentro de la diversidad pueden señalarse tres líneas de acción comunes: la aplicación de ambiciosos programas sociales, el impulso a un marco normativo que disminuya la desigualdad y los privilegios y una posición más crítica y combativa frente a los organismos internacionales y las empresas inversoras.

Políticas y programas sociales

El 43% de la población latinoamericana vive en la pobreza, por lo que el cambio político se expresa en un compromiso firme con la realización de inversiones en el ámbito social. Por un lado, se destinan cantidades crecientes de recursos a áreas fundamentales para mejorar las condiciones de vida como la sanidad y, sobre todo, la educación, considerada una herramienta esencial para romper la desigualdad. Pero además, el aumento del gasto en servicios sociales se complementa con la puesta en marcha de una amplia red de programas dirigidos a los sectores con mayor nivel de exclusión. Iniciativas como el «Programa Hambre Cero» en Brasil, los «Planes Trabajar» en Argentina o las «misiones» del gobierno de Hugo Chávez son la expresión más característica y reconocible de este compromiso con los sectores más vulnerables. Todos estos programas movilizan cuantiosas sumas de dinero y suponen una transferencia directa de recursos desde el estado a los ciudadanos más empobrecidos.

La forma en que son gestionados y el sentido con el que se han concebido son, sin embargo, diferentes: Hambre Cero mantiene, por ejemplo, un compromiso de renuncia al asistencialismo y de transparencia y equidad en la selección de los beneficiarios. El programa transfiere a las familias con peores niveles de ingreso una paga o bienes de primera necesidad, pero condiciona la entrega de los recursos a la obligación, por parte de los beneficiarios, de aceptar ciertas obligaciones, como el envío de sus hijos a la escuela o su propia participación en programas de capacitación que les faciliten una posterior incorporación al mercado de trabajo. Se pretende así no fomentar la dependencia del estado y ofrecer al individuo herramientas que le permitan salir de la pobreza de forma permanente.

En una región como ésta, en la que tradicionalmente el estado ha utilizado las transferencias directas de recursos para ganar o fidelizar el voto de distintos sectores, la apuesta de Da Silva por desvincular las ayudas de los colores políticos es absolutamente necesaria.³ Hambre Cero establece sus beneficiarios en función de criterios objetivos vinculados al nivel de renta, y excluye la posibilidad de canalizar los recursos a través de organizaciones políticas dependientes de la presidencia.

Esta concepción de los programas sociales como políticas estatales, independientes del gobierno que los gestiona, no se manifiesta del mismo modo en las «misiones» de Hugo Chávez o los «Planes Trabajar» que inició Duhalde en Argentina, distribuidos en ambos casos a través de grupos políticos vinculados al gobierno. Los círculos bolivarianos en Venezuela o las *manzanas* de Buenos Aires han sido responsables directos de la transferencia de recursos estatales a grupos de ciudadanos necesitados de ellos, pero la elección de los receptores no ha sido ajena a fidelidades partidarias. En Argentina, el gobierno de Kirchner se está replanteando el sistema de gestión de los programas de ayuda social, para que se distribuyan con mayor independencia y superen el asistencialismo que hasta ahora los ha caracterizado. La apuesta por la institucionalización de las políticas sociales que supone Hambre Cero es una muestra del compromiso de *Lula* y ahora Kirchner con la construcción de un estado que no haga diferencias entre ciudadanos y los atienda en función de sus necesidades.

Normas y leyes contra la desigualdad y los privilegios

Numerosos estudios realizados para América Latina durante la última década muestran que la democracia es el sistema de gobierno pre-

³ Los diversos programas sociales aplicados en América Latina desde la década de los noventa (en los que fueron pioneros el gobierno de la Concordancia en Chile y el de Fernando Henrique Cardoso en Brasil), el uso político de algunos de ellos, el asistencialismo y los intentos por superarlo y la eficacia y transparencia que se logró en la gestión de los más avanzados son trabajados por diferentes autores para cada uno de los países: Instituto Ciudadanía, *Projeto Fome Zero. Uma proposta de Política de Segurança Alimentaria para Brasil*, Sao Paulo, 2001; Sonia Draibe y M^a Elena de Castro, «The system of social protection in Brazil», en *Democracy and Social Policy Series*, Kellogg Institute-Universidad de Notre Dame, Indiana, 1995; R. French-Davis, *Reforma, crecimiento y políticas sociales en Chile*, LOM, Santiago, 2001.

ferido por la mayoría de los ciudadanos de la región, pero también que produce elevados índices de insatisfacción. Un 44,9% daría por válida la llegada al poder de un gobierno autoritario si es capaz de garantizar mejores y sostenidas condiciones de vida.⁴ El descrédito de la democracia es consecuencia de la extendida percepción entre los ciudadanos de que este sistema de gobierno ha sido complaciente con las desigualdades y poco comprometido con el bienestar de la mayoría. Los nuevos gobiernos reconocen que sus países han tenido casi siempre democracias electorales en las que estaban ausentes los componentes sociales y económicos, de ahí su interés por impulsar medidas capaces de romper la desigualdad.

Un ejemplo de esta línea de acción comprometida con la eliminación de los privilegios es la Ley de Previsión Social aprobada por el gobierno brasileño en el año 2003. La Ley pretende controlar el déficit generado por las pensiones de los trabajadores del sector público —más concretamente por los cargos superiores de la Administración—, que suponían el 63% del gasto social del estado. El sistema beneficiaba enormemente a la alta cúpula de funcionarios, ya fueran legisladores, jueces, cargos políticos o militares, que tenían la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro o casi completo sin necesidad de haber cotizado más allá de los últimos años de su vida laboral y sin la exigencia de una edad mínima. Estas pensiones eran una onerosa carga para el erario público, insostenible además por las agudas diferencias que establecía entre ellos y los trabajadores del sector privado.

La ley fue duramente criticada por los sectores afectados, que expresaron su descontento y amenazaron con huelgas y movilizaciones. Sin embargo, el Congreso pudo sacarla adelante con el apoyo de la coalición que sostiene al gobierno y de partidos de la oposición como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso. También recibió el respaldo de la amplia mayoría de la opinión pública. La nueva ley aumenta el tiempo de cotización y elimina la posibilidad de que los altos cargos de la Administración se retiren y sigan cobrando sus elevados sueldos. Desmontar los reaseguros legales que protegen los intereses de los grupos acomodados es un paso

⁴ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, PNUD, Nueva York, 2004.

imprescindible para lograr que América Latina deje de ser la región más desigual del planeta en cuanto a distribución de la renta.

Este compromiso por consolidar un estado ajeno a los privilegios también es patente en varias iniciativas que pretenden impedir que algunos grupos de ciudadanos sigan por encima de las normas que rigen para los demás. El gobierno de Néstor Kirchner, consciente de la pésima imagen que tienen los argentinos de las instituciones y los políticos por la discrecionalidad con la que actuaron en el pasado, ha tomado decisiones encaminadas a someter a la ley a poderosos grupos como las Fuerzas Armadas o los jueces.

En el caso de los militares, el presidente anuló la amnistía concedida a los responsables de desapariciones y secuestros durante la dictadura militar, rompiendo la impunidad con la que han desafiado al marco legal argentino. Respecto de los jueces, se inició el procesamiento de los miembros de la Corte Suprema que durante la presidencia de Carlos Menem estuvieron vinculados a casos de corrupción y no ejercieron las labores de control sobre el gobierno. Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y revertir los altos grados de insatisfacción con la democracia, el combate a la corrupción y el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley es otro reto obligado.

La búsqueda de una nueva relación con los grupos económicos

El tercer ámbito de acción es el diseño de una estrategia que permita mantener una relación diferente con los grandes agentes económicos, ya sean organismos financieros internacionales o empresas extranjeras radicadas en la región. Frente a la actitud casi siempre complaciente y acrítica que tuvieron los Ejecutivos de los años noventa, los nuevos presidentes están trabajando para imponer negociaciones donde hubo acatamiento. No pretenden romper relaciones, pero intentan mostrar que no aceptan de forma incuestionada las directrices impuestas.

Kirchner decidió, al inicio de su mandato, cesar los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó enormes tensiones en las relaciones del país con esta institución. El gobierno argentino nunca ha abandonado las negociaciones y tiene intención de cumplir sus compromisos, pero a la vez trata de forzar la situación y obtener tiempo para que el pago de la deuda no detraiga recursos im-

prescindibles para realizar políticas sociales en un país con elevadísimos índices de pobreza.⁵

Por tanto, se ven obligados a aceptar el modelo económico pero trabajan para lograr que sus valedores acepten la introducción de ciertas modificaciones. *Lula* y *Kirchner* llevan tiempo demandando a los organismos financieros internacionales una mayor coherencia y flexibilidad a la hora de considerar como gasto cualquier tipo de inversión que haga el estado. Ambos han asumido el compromiso de controlar el déficit, pero exigen que no se contabilicen en esa lista de gasto las inversiones productivas vinculadas a la creación de infraestructuras, vitales para crear puestos de trabajo y relanzar la economía. También reclaman que el pago de la deuda sea compatible con la obligación de los estados de garantizar a sus ciudadanos unas condiciones de vida dignas.

Los limitados resultados del modelo neoliberal han provocado en los últimos años una intensificación del debate en torno a su idoneidad como estrategia de crecimiento de largo plazo, debate que ha llegado incluso a organizaciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los responsables directos de su aplicación en la región. La constatación de sus serias limitaciones y su elevado coste social han creado un ambiente más favorable a la revisión de algunos principios básicos del modelo. El BID está trabajando en la actualidad sobre esa propuesta de diferenciación de gasto productivo e improductivo que permitiría a los gobiernos latinoamericanos tener recursos para mejorar las infraestructuras económicas y generar a la vez puestos de trabajo.

Otro ámbito de acción en el que resulta visible esta apuesta por un posicionamiento más crítico y combativo frente a los grandes intereses económicos es la actitud ante las empresas extranjeras establecidas en su suelo. Estos gobiernos han endurecido notablemente el discurso público frente a ellas y se plantean establecer medidas fiscalizadoras más severas. *Chávez* en Venezuela y *Kirchner* en Argentina han sido especialmente contundentes en sus críticas a las compañías que se beneficiaron de los procesos de privatización, por la baja calidad de los servi-

⁵ Para muchos analistas, el endurecimiento en las negociaciones con el FMI ha tenido consecuencias no sólo económicas: «Ensanchó el margen de decisiones del estado nacional y contribuyó a restablecer un sentido de dignidad para los argentinos», afirma *Isidoro Cheresky* en «Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política», *Nueva Sociedad*, N° 193, Caracas, 2004.

cios que ofrecen, los altos precios que cobran por ellos y el enorme margen de beneficio con el que operan. La Ley de Hidrocarburos que aprobó el gobierno de Caracas, que aumenta del 16 al 31% los impuestos que gravan las actividades en este sector, es expresión de una línea de acción que ocupa también a otros gobiernos. Esta apuesta por un estado que desempeñe un activo papel regulador sobre las grandes empresas y por obtener de éstas un pago más ajustado a las ganancias es un frente que provocará conflictos, pero que resulta imprescindible.

El reto de dar respuesta urgente a las demandas acumuladas

Las grandes expectativas que ha generado el triunfo de estos gobiernos son proporcionales a la urgente necesidad de cambio en las condiciones de vida de las mayorías. El adverso contexto económico en el que deben actuar y la impaciencia con la que los votantes esperan mejoras tangibles son una dura fuente de presión. Están aplicando reformas para modificar las estructuras económicas y políticas heredadas, pero necesitan tiempo para mostrar resultados, un tiempo del que no disponen los 214 millones de latinoamericanos que viven en la pobreza.

Por tanto, no sólo tienen que lograr una transformación rápida de las estructuras que alimentan la pobreza y la desigualdad sino que, en la mayoría de los casos, deben hacerlo en un espacio político desfavorable. Tabaré Vázquez ha llegado a la presidencia de Uruguay con un rotundo triunfo que le ha entregado la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, una situación que facilitará la aplicación de su proyecto reformista. El resto de estos presidentes no goza, sin embargo, de una situación similar. *Lula* ganó la presidencia de Brasil en segunda vuelta con más del 60% de los votos, pero no controla el Congreso ni el Senado y esto le exige un esfuerzo constante de negociación. Hasta ahora ha contado con el apoyo de partidos como el PSDB para sacar adelante proyectos fundamentales como la Ley de Previsión Social, pero tiene por delante la difícil tarea de reunir suficiente respaldo para avanzar en otras áreas como la política agraria, en la que la oposición de los estados está garantizada. Además, también debe enfrentar la oposición y crítica de algunos grupos del interior del PT que consideran excesivamente lento el ritmo de las reformas y poco ambicioso su alcance.

En Argentina, Kirchner está en una posición igualmente inestable al depender del apoyo de un partido que responde a otros líderes y lealtades.

En el momento de su elección como candidato a la presidencia por el Partido Justicialista, Kirchner no era una de las figuras centrales del peronismo. Fue precisamente su bajo perfil lo que llevó al influyente Duhalde a escogerle para hacer frente a la candidatura de Carlos Menem, tratando de asegurarse un «delfín» en la Casa Rosada. Desde su llegada a la presidencia, Kirchner está tratando de construir su propia base política, pero no ha logrado avanzar lo suficiente. Los legisladores peronistas respaldan por el momento la gestión de un presidente que goza de gran popularidad, pero la mayor parte de ellos es reticente a su liderazgo en el partido y leal a Eduardo Duhalde. Estas tensiones en el interior de las formaciones abren un incómodo frente de lucha, que se suma al que suponen los opositores a las reformas y complica la aplicación de éstas.

El presidente Hugo Chávez está en una situación de bloqueo e inestabilidad extrema en Venezuela, un país en el que los cauces de diálogo entre el gobierno y la oposición han desaparecido de forma que cada uno actúa desconociendo la legitimidad del otro. Chávez, por ello, no está en disposición de articular las alianzas y consensos necesarios para desarrollar transformaciones profundas. Tanto gobierno como oposición alimentan una situación de parálisis que limita seriamente las oportunidades de cambio.

El escaso margen de maniobra que impone el modelo económico, la presión que supone el deseo de cambio inmediato por parte de los votantes y los problemas de inestabilidad y apoyo interno no auguran a estos gobiernos un futuro exento de dificultades. Existen, sin embargo, dos aspectos que permiten pensar en una probable consolidación a medio plazo. En primer lugar, esta nueva izquierda posee un proyecto reformista que oponer al modelo neoliberal, un proyecto del que carecen muchos partidos de la oposición, hayan sido o no responsables directos de la aplicación de ese modelo. La puesta en marcha del programa está demostrando, además, su capacidad de gestión, lo que disipa las dudas que se sembraron desde el exterior y el interior de la región en torno a que iban a causar una inestabilidad económica irreversible. Por el contrario están siendo garantía de estabilidad, sin que ésta sea equivalente al mantenimiento de las estructuras que alimentan la pobreza y la desigualdad. La aplicación de políticas que muestran un compromiso con los sectores más desfavorecidos y con la destrucción de los privilegios hasta ahora amparados por el estado, junto con el posicionamiento más autónomo frente a los agentes económicos internacionales, les han otorgado un amplio respaldo ciudadano. En la medida en que estas políticas

se intensifiquen y los Ejecutivos sigan dando muestra de desempeño eficaz y ajeno a la corrupción, aumentará sin duda el tiempo que los votantes estén dispuestos a otorgarles.

Pero además, estos gobiernos están completando su proyecto interior reformista con una estrategia de política exterior que muchos latinoamericanos consideran imprescindible: el refuerzo de las relaciones regionales como vía de inserción más eficiente en la globalización. Durante los años noventa, sólo Brasil insistía en la necesidad de reforzar los vínculos entre los países del sur del continente, para enfrentar desde una postura más sólida sus relaciones con Estados Unidos o los grandes agentes económicos internacionales. La propuesta de conformar un Área del Libre Comercio del Sur de América (ALCSA), realizada por el gobierno de Brasilia a sus vecinos en septiembre de 2000, es su expresión más elaborada. Pero el ALCSA no encontró acogida en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que prefirieron enfrentar en solitario los retos de la apertura económica.

Tras década y media de neoliberalismo, la región es ahora plenamente consciente de su débil posición ante los países desarrollados, que imponen normas de comercio draconianas para sus exportaciones, ante los organismos financieros que controlan su deuda y condicionan los préstamos y ante las empresas extranjeras que se asentaron en ella. La apuesta por el fortalecimiento regional es hoy un proyecto compartido por los gobernantes de izquierda y que ha encontrado en el presidente *Lula da Silva* un portavoz especialmente activo. El Consenso de Buenos Aires que firmaron él y Kirchner en octubre de 2003 muestra la renovada voluntad latinoamericana de consolidar el entendimiento regional para lograr «una mayor autonomía de decisión que permita hacer frente más eficazmente a los movimientos desestabilizadores del capital especulativo y a los intereses contrapuestos de los bloques más desarrollados, amplificando nuestra voz en los diversos foros y organismos multilaterales».⁶ Esta propuesta de acción externa común fortalece la

⁶ *Consenso de Buenos Aires*, punto 16. El documento firmado el 16 de octubre de 2003 insiste tanto en el fortalecimiento regional como en la necesidad de realizar, en las democracias latinoamericanas, reformas profundas que garanticen su fortalecimiento y erradiquen definitivamente la pobreza. Para lograr esto se comprometen expresamente con la consolidación de las políticas públicas de contenido social y la mejora de la gestión y la transparencia de gobierno. El texto puede consultarse en numerosas páginas web, por ejemplo en: <http://www.resdal.org/consenso-bsas.html>.

estrategia de transformación global que estos gobiernos plantean para América Latina.

Dado el poco tiempo transcurrido desde su llegada al poder y la magnitud de los cambios que se esperan, es demasiado pronto para hacer un balance de esta gestión reformista y de su impacto sobre los votantes. Sin embargo, estos gobiernos están demostrando que tienen un proyecto de largo plazo para consolidar un sistema político y económico realmente democrático e incluyente. De momento, ya han comenzado a aplicar medidas destinadas a romper la pobreza y la exclusión de una región que posee recursos naturales suficientes para ofrecer buenas condiciones de vida a todos sus ciudadanos. La nueva izquierda latinoamericana reconoce las causas de esa pobreza y tiene propuestas para combatirla. Avanzar en su ejecución y demostrar su compromiso con una gestión eficaz y honesta será condición ineludible para asegurar su permanencia en el gobierno.